

La seguridad escolar no puede esperar

Cuando se roban alimentos, computadores, cables o instrumentos musicales, se vulnera el derecho a una educación de calidad y se debilita el sentido de pertenencia de las comunidades.

La seguidilla de robos que ha afectado a distintos establecimientos educacionales de La Serena no solo daña la infraestructura y los recursos de las comunidades escolares, sino que vulnera la dignidad de estudiantes, docentes y asistentes que ven cómo sus espacios de formación se transforman en blanco de la delincuencia. Los hurtos, que han impactado especialmente a liceos y colegios públicos, evidencian un problema estructural que requiere medidas urgentes y sostenidas.

La reciente decisión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Elqui de instalar alarmas en 28 recintos y ajustar los turnos de los nocheros es, sin duda, un paso necesario. Pero también es insuficiente. No se trata solo de reaccionar tras los hechos consumados, sino de establecer una estrategia preventiva que articule a los distintos actores responsables de la seguridad escolar: municipios, policías, comunidad educativa y el propio Estado.

En algunos casos, los delincuentes han regresado incluso después de denuncias y reparaciones, lo que revela un patrón preocupante: los colegios son vistos como “zonas fáciles”, sin mayor resguardo ni consecuencias. Es imperativo romper con esa lógica.

El daño no es solo económico. Cuando se roban alimentos, computadores, cables o instrumentos musicales, se vulnera el derecho a una educación de calidad y se debilita el sentido de pertenencia de las comunidades. Además, el impacto emocional sobre estudiantes y profesores no es menor: ¿cómo concentrarse en clases cuando el entorno es percibido como inseguro?

La educación no puede construirse sobre el temor. Es hora de reforzar la vigilancia, pero también de avanzar en una cultura de corresponsabilidad y protección. Porque cuando una escuela es atacada, no pierde solo el establecimiento: pierde toda la sociedad.